

Raúl Ampuero

El debate de los últimos tiempos en la izquierda italiana es, sin lugar a dudas, de verdadera importancia para el destino del país. Mas allá de sus implicaciones locales, sin embargo, pone al centro de la discusión el tema a la vez viejo y nuevo de la compatibilidad del socialismo con la democracia, sea como proyecto político, sea como posibilidad histórica. Hablamos del socialismo, naturalmente, en el sentido de un sistema alternativo al capitalismo, y de la democracia como un régimen que conserve y enriquezca el patrimonio de libertades políticas y personales consagrado en las constituciones occidentales. Nadie debería ofenderse si comprobamos que la socialdemocracia ha preservado eficientemente los valores democráticos, allí donde ha asumido funciones de gobierno, pero renunciando en la práctica ( y aún en la teoría ) a sus proyectos originales de transformar radicalmente la sociedad y sus mecanismos de funcionamiento y desarrollo.

Más bién con fines metodológicos, el problema de la compatibilidad se puede considerar en dos momentos sucesivos, aunque estrechamente ligados en cuanto se condicionan reciprocamente: el de la lucha por el poder y el de la institucionalización ulterior. En la primera fase la cuestión se centra en los métodos que se emplean para asumir la dirección del Estado; en la segunda, en la creación de un sistema de relaciones que junto con extender el dominio social de los medios de producción, asegure a todos aquellos derechos ya consagrados en la democracia tradicional.

La consideración teórica del tema, en cualquiera de sus dos aspectos, conduce a menudo a la contraposición de modelos puramente intelectuales o a falsos dilemas, <sup>llegar a tener</sup> en cuando se supone que toda expresión del socialismo lleva inevitablemente a formas despóticas en el ejercicio del poder, según pareciera confirmarlo la historia del "socialismo real". Sin subestimar, por cierto, la riqueza de enfoques y matices que la polémica ofrece desde ese ángulo, preferimos hacer referencia a una experiencia viva y reciente, <sup>para buscar una</sup> ~~que puede servir de~~ respuesta concreta, política e histórica, a muchos interrogantes: la experiencia del gobierno chileno de la Unidad Popular. <sup>Tal vez</sup> ~~Piense que~~ el testimonio de Allende ayude mucho más a comprender el origen y la verdadera naturaleza de las amenazas que se ciernen sobre la democracia contemporánea que las más eruditas reflexiones doctrinales. ~~Quizás la~~

Publicado en  
"LA REPUBBLICA"  
ROMA, 22 SEPT. 1978, en  
italiano.  
¡ SE PUEDE REPRODUCIR !

única lección incontrovertible del proceso chileno, la única que no admite dos interpretaciones diversas, ~~sea~~<sup>es</sup> precisamente, ~~la~~<sup>la</sup> que permite identificar sin ningún género de dudas a los reales enemigos de la democracia de nuestro tiempo. Si ésta enseñanza, al menos, fuera asimilada por los pueblos de otras latitudes, querría decir que nuestra tragedia no ha sido del todo inútil.

No es ocioso recordar que Allende, durante su campaña, ofreció abiertamente un programa de transición al socialismo y alcanzó el gobierno con riguroso acatamiento de las normas constitucionales. Triunfó con la primera mayoría en las urnas y fué confirmado Presidente, después, por una aplastante mayoría parlamentaria. Cuando - para obtener el apoyo de la Democracia Cristiana en el Congreso - se le exigió suscribir un conjunto de reformas constitucionales destinadas a ofrecer garantías adicionales de respeto del régimen democrático, lo aceptó sin reservas. Asumió así un cargo<sup>al</sup> que la derecha y el centro - no la izquierda - habían venido confiriendo un rol preponderante en el ordenamiento institucional.

Durante su gestión nacionalizó la gran minería del cobre, con una ley unánimemente aprobada por el Congreso Nacional; eliminó el latifundio, con la ley de Reforma Agraria elaborada por la Democracia Cristiana durante el gobierno de Frei; sometió a la administración del Estado un elevado número de empresas privadas mediante el uso del Decreto ~~con Fuerza de~~ Ley 520, vigente desde 1932 y empleado sucesivamente por todos los gobiernos para enfrentar emergencias de tipo económico o social. De éste modo, con procedimientos inobjetablemente legales, el Área de Propiedad Social pasó a constituir la base material de una economía orientada al socialismo.

Tampoco puede decirse que el gobierno de Allende careciese de consenso para su programa socialista. En la elección presidencial más de un tercio del país le dió su apoyo explícito, mientras otra fracción considerable de electores había votado por el "socialismo comunitario", inscrito en las banderas del candidato democristiano, aún que haya sobrados fundamentos para dudar de la sinceridad de la fórmula y de sus portavoces oficiales. La marcha hacia un régimen socialista era, entonces, una gran aspiración nacional, confirmada después con el 51% ~~de~~ logrado por los partidos populares en las elecciones administrativas del 71 y con el 43% que reunieron en 1973, en medio de una furiosa campaña de boicot y desprestigio llevada a cabo tanto en el interior como en el exterior del país. Por lo demás, como en todas las democracias parlamentarias, durante los tres años se sucedieron las eleccio-

nes complementarias con regularidad absoluta, con victorias y derrotas alternativas de la coalición de gobierno.

En suma, ninguna amenaza contra la democracia venía del poder. Sin embargo, las instituciones y fuerzas conservadoras se alzan y derrocan el gobierno popular. La derecha tradicional y la democracia cristiana, el ejército y los tribunales, la prensa <sup>burguesa</sup> y las corporaciones patronales, el gobierno norteamericano y sus servicios secretos, las compañías multinacionales, todas las respetables entidades que hasta el día anterior juraban devoción por la democracia, promueven y sostienen el golpe de Estado mas sanguinario y brutal de la violenta historia latinoamericana.

De éste hecho, al menos los chilenos sacamos una conclusión simple y definitiva: cuando un pueblo cualquiera decide dar a la democracia una dimensión socialista, las fuerzas conservadoras prefieren sepultar la democracia. Si tal premisa es correcta, no son los revolucionarios, ni los marxistas, ni los comunistas, quienes deben dar hoy garantías de su lealtad democrática, sino al revés, aquellos que se han puesto como tarea suprema impedir a los trabajadores cualquiera opción socialista.

Roma, 11, de setiembre de 1978.